

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN
SALA SUPERIOR**

HON. EDUARDO BHATIA GAUTIER,
SENADOR POR ACUMULACIÓN

CIVIL NÚM.

HON. SILA MARI GONZÁLEZ
CALDERÓN,
SENADORA POR ACUMULACIÓN

HON. JUAN EUGENIO HERNÁNDEZ
MAYORAL,
SENADOR POR ACUMULACIÓN

HON. EDER E. ORTIZ ORTIZ,
SENADOR POR ACUMULACIÓN

HON. JOSÉ LUIS DALMAU
SANTIAGO,
SENADOR POR ACUMULACIÓN

HON. JORGE I. SUAREZ
CÁCERES,
SENADOR POR ACUMULACIÓN

HON. ALEJANDRO GARCÍA
PADILLA,
SENADOR POR ACUMULACIÓN

HON. CIRILO TIRADO RIVERA,
SENADOR POR ACUMULACIÓN

DEMANDANTES

SOBRE:

VS.

HON. THOMAS RIVERA SCHATZ,
SENADOR POR ACUMULACIÓN Y
PRESIDENTE DEL SENADO DE
PUERTO RICO; MANUEL TORRES
NIEVES, SECRETARIO DEL SENADO
DE PUERTO RICO; SENADO DE
PUERTO RICO

INTERDICTO PROVISIONAL,
INJUNCTION PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA.

DEMANDADOS

D E M A N D A

Comparece la **Parte Demandante**, por derecho propio y, ante este Honorable Tribunal, ALEGA, EXPONE Y SOLICITA:

I. IDENTIFICACION DE LA PARTE DEMANDANTE

1. La Parte Demandante la componen EDUARDO BHATIA GAUTIER, mayor de edad, senador por acumulación y con dirección postal en

P.O. Box 360643, San Juan, PR 00936; SILA MARI GONZÁLEZ CALDERÓN, mayor de edad, senadora por acumulación y con dirección postal en P.O. Box 364207, San Juan, PR 00936-4207; JUAN EUGENIO HERNÁNDEZ MAYORAL, mayor de edad, senador por acumulación y con dirección postal en P.O. Box 9023626, San Juan, PR 00902-3626; EDER E. ORTIZ ORTIZ, mayor de edad, senador por acumulación y con dirección postal en P.O. Box 1846, Orocovi, PR 00720; JOSÉ LUIS DALMAU SANTIAGO, mayor de edad, senador por acumulación y con dirección postal en P.O. Box 1103, Caguas, PR 00726-1103; JORGE I. SUAREZ CÁCERES, mayor de edad, senador por acumulación y con dirección postal en Los Rosales, Calle 7 N-5, Humacao, PR 00791; ALEJANDRO GARCÍA PADILLA, mayor de edad, senador por acumulación y con dirección postal en La Serranía #4, Caguas, PR 00725; y CIRILO TIRADO RIVERA, mayor de edad, senador por acumulación y con dirección postal en Box 1856, Guayama, PR 00785.

II. IDENTIFICACION DE LA PARTE DEMANDADA

2. La Parte co-demandada, Thomas Rivera Schatz, es mayor de edad, Senador por Acumulación y con dirección postal en Senado de Puerto Rico, El Capitolio, Apartado 9023431, San Juan, P.R. 00902-3431.

3. Se demanda al **Senador Thomas Rivera Schatz** en su calidad de Senador por Acumulacion y en su capacidad oficial como Presidente del Senado de Puerto Rico.

4. La Parte co-demandada, Manuel Torres Nieves, es mayor de edad y con dirección postal en Senado de Puerto Rico, El Capitolio, Apartado 9023431, San Juan, P.R. 00902-3431.

5. Se demanda a **Manuel Torres Nieves** en su capacidad oficial como Secretario del Senado de Puerto Rico.

6. La Parte co-demandada, **Senado de Puerto Rico**, es un cuerpo legal creado al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

7. La presente acción surge al palio de las prerrogativas y funciones concedidas a los miembros del Senado de Puerto Rico por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Artículo III Sección 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

8. Los legisladores, en su condición de miembros de la Asamblea Legislativa, tienen capacidad jurídica para vindicar sus prerrogativas y funciones constitucionales. Hernández v. Hernández Colón, 129 D.P.R. 824 (1992).

9. Existen diversas instancias bajo las cuales el Tribunal Supremo de Puerto Rico, le ha reconocido legitimación activa a un legislador para incoar una acción para vindicar sus derechos como miembro de la Asamblea Legislativa.

10. En la sesión del 24 de agosto del 2009, el Presidente del Senado de Puerto Rico les coartó el derecho que tienen los senadores que suscriben a debatir sus planteamientos en el Hemiciclo y restringió su intervención en el proceso de aprobación de medidas legislativas.

11. Al no permitirles expresarse luego de así solicitarlo a viva voz ni presentar enmiendas a las piezas legislativas, se menoscabó su función constitucional primordial, la cual es legislar. Las prerrogativas legislativas que se han visto directamente afectadas por la conducta del Presidente del Senado de Puerto Rico, avaladas por su Mayoría Parlamentaria del Partido Nuevo Progresista, son la garantía que tiene todo legislador a ejercitar plenamente su derecho constitucional a legislar comprendido en el Artículo III Sección 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982).

12. Las prerrogativas legislativas de los senadores demandantes están siendo anuladas porque no se les permite fiscalizar adecuadamente la obra legislativa y se les prohíbe la

participación plena en una de las etapas más críticas del proceso legislativo.

13. De igual forma, los demandantes han sido privados de los derechos que les asisten a todos los senadores, incluyendo toda minoría legislativa, según la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y jurisprudencia aplicable. Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986).

14. Los senadores que radican el presente recurso han agotado todos los remedios que tienen a su disposición para lograr que se les permita ejercer plenamente sus prerrogativas constitucionales y se les reconozca su derecho a fiscalizar.

15. Los actos de la Mayoría Parlamentaria en el Senado de Puerto Rico y de su Presidente, exceden su autoridad constitucional y levantan serios problemas de constitucionalidad y no constituyen meras disputas procesales o interpretativas.

16. En vista de la lesión constitucional que produce el impedir a los senadores de minoría ejercer sus prerrogativas legislativas de legislar y fiscalizar la obra legislativa, los demandantes solicitan la intervención de la Rama Judicial.

17. Es función ineludible de los tribunales interpretar la Constitución y velar que el espíritu y el esquema democrático de esta Carta no se vulnere. Fuster v. Busó, 102 D.P.R. 327 (1974); García Passalacqua v. Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 49 (1976); Santa Aponte v. Srío. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 731-734 (1982).

III. HECHOS

18. El 24 de agosto de 2009, el Senado de Puerto Rico inició sus trabajos aproximadamente a la 1:30 p.m.

19. En los turnos iniciales, ninguno de los senadores de minoría fue reconocido por el co-demandado Presidente del Senado, a pesar de estar presentes en el Hemiciclo y haber

expresado interés en así hacerlo, conforme al Reglamento del Senado. (Sección 24.2 de la Regla 24 del Reglamento del Senado de Puerto Rico) El Presidente del Senado leyó de una lista, que había preparado con antelación, los nombres de los senadores a quienes les permitiría consumir un turno inicial, aún cuando algunos de éstos no se encontraban en el Hemiciclo en ese momento.

20. En la consideración de las medidas en el Calendario de Órdenes Especiales del día, los senadores demandantes intentaron insistentemente levantar varios cuestionamientos.

21. Uno de los cuestionamientos principales hechos por los senadores demandantes era sobre la ausencia de una certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre el impacto fiscal de dichas medidas y la falta de cumplimiento con el Artículo 8 de la Ley Núm. 103 de 25 de mayo de 2006, conocida como "Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006".

22. De igual forma, los senadores demandantes intentaron plantear que los informes de las comisiones legislativas que evaluaron las medidas bajo consideración del Senado en pleno carecían de recomendaciones específicas a los efectos de subsanar cualquier impacto fiscal negativo que resultara de la aprobación de dichas medidas. Estas recomendaciones son también requeridas por el Artículo 8 de la Ley Núm. 103.

23. De las 26 medidas bajo consideración del Senado en la sesión del 24 de agosto de 2009, sólo tres medidas venían acompañadas de un informe de comisión que hiciera constar el recibo de la certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto antes mencionada y requerida por la Ley Núm 103.

24. Durante parte de la sesión, la presidencia del Senado de Puerto Rico fue ocupada por un presidente en funciones o por un presidente accidental.

25. Luego de haber discutido varias medidas legislativas, el Presidente del Senado, Hon. Thomas Rivera Schatz, regresó al hemiciclo senatorial y asumió el cargo de presidente en propiedad.

26. El Presidente del Senado dirigió los trabajos del Cuerpo de manera que se consideraran las medidas en el calendario legislativo sin reconocer a los senadores demandantes de modo alguno, quienes interesaban participar del procedimiento legislativo mediante el debate, la discusión de los proyectos de ley y la presentación de enmiendas, tal como había sucedido hasta el momento en el que el co-demandado asumió la presidencia en propiedad. En este proceso, el Presidente del Senado no reconoció a los senadores demandantes mientras intentaban presentar enmiendas, conforme a la Regla 37 del Reglamento del Senado, R. del S. 27 de 12 de enero de 2009, y solicitaban el uso de la palabra, de acuerdo a la Regla 38 del Reglamento del Senado, R. del S. 27 de 12 de enero de 2009.

27. Por tal razón, los senadores intentaron utilizar los remedios que dispone el Reglamento del Senado de Puerto Rico para cuestionar el incumplimiento con dicha normativa, y específicamente, intentaron presentar a viva voz cuestiones de orden, conforme a la Regla 44, y plantearon a viva voz cuestiones de privilegio personal y del Cuerpo, conforme a la Regla 45, sin tampoco ser reconocidos.

28. Esta continua violación del Reglamento del Senado de Puerto Rico por parte del Presidente del Senado también se extiende a los procesos internos de las Comisiones. Particularmente, uno de los proyectos de ley que se aprobó en la sesión de referencia, estaba acompañado de un informe suscrito por la comisión que evaluó la medida en segunda instancia, aún cuando dicha Comisión no convocó para la vista pública que se celebró,

en contravención al Reglamento del Senado. (Sección 13.7 del Reglamento del Senado de Puerto Rico)

29. Sin reconocer las objeciones de los senadores de minoría y sin reconocerles en el uso de la palabra, el Presidente del Senado llamó todas las medidas bajo consideración a votación final, con la excepción de tres medidas que fueron dejadas sobre la mesa, sin haber permitido a los senadores demandantes el ejercicio de sus prerrogativas y funciones constitucionales.

30. En violación a la sección 40.5 del Reglamento del Senado, y a pesar de la objeción oportuna de los demandantes, el Presidente del Senado llamó personalmente a los Senadores para que emitieran su voto, comenzando por los de minoría, aquí demandantes, y luego los de mayoría. La sección 40.5 del Reglamento requiere que la votación por lista la llame el Secretario del Senado y no el Presidente.

31. Todas las medidas fueron aprobadas con 22 votos a favor y 9 votos en contra.

32. Los 9 votos en contra fueron los correspondientes a los senadores demandantes, todos miembros de la delegación minoritaria del Partido Popular Democrático en el Senado, quienes emitieron sus votos en contra como acto de protesta ante el atropello suscitado y las acciones ilegales e inconstitucionales de los demandados.

IV ALEGACIONES DE DERECHO

A. Violación a la Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006

33. La Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006, en su artículo 8, lee:

Toda Comisión Legislativa que radique un informe proponiendo la aprobación de una medida, **deberá** incluir en el mismo una sección titulada "Impacto Fiscal", en la

cual certifique el impacto fiscal que estima que la aprobación de la medida tendría sobre los presupuestos de las agencias, departamentos, organismos, instrumentalidades o corporaciones públicas, si alguno. El impacto será determinado mediante certificación emitida a esos fines por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el requerimiento del cual será indispensable para el trámite de la medida. De existir impacto, el informe legislativo deberá definir recomendaciones específicas a los efectos de subsanar cualquier impacto fiscal negativo que resulte de la aprobación de una pieza legislativa. Asimismo, toda medida legislativa que se pretenda aprobar que imponga obligaciones económicas a cualquier agencia, departamento, organismo, instrumentalidad o corporación pública, deberá identificar los recursos que podrán utilizar la entidad afectada para atender tales obligaciones. (Ley 103 de 25 de mayo de 2006, Artículo 8, con énfasis nuestro).

34. En la sesión del 24 de agosto de 2009, en violación a la disposición citada, 23 de las 26 medidas legislativas bajo consideración del Senado de Puerto Rico venían acompañadas de un informe de comisión que no hacía constar el recibo de la certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto requerida por la Ley 103, *supra*. Los informes de las medidas tampoco contenían recomendaciones específicas a los efectos de subsanar cualquier impacto fiscal negativo que resultara de la aprobación de éstas según requiere la Ley 103, *supra*.

35. Por tanto, las medidas tramitadas en la sesión senatorial del 24 de agosto de 2009 no fueron aprobadas conforme al derecho aplicable. Fueron aprobadas en violación al ordenamiento legal vigente; Ley 103 de 25 de mayo de 2006, Artículo 8.

B. **Violación de las prerrogativas y funciones constitucionales de los senadores de minoría.**

36. La premisa básica de nuestro ordenamiento constitucional es que la mayoría gobierna mediante sus representantes debidamente electos en la Rama Legislativa. Sin embargo, nuestra

Constitución también incorporó en la Sec. 7 del Art. III un innovador mecanismo para garantizar la representación efectiva de las minorías en la Asamblea Legislativa. Véase Fuster v. Busó, supra. Este mecanismo "garantiza la existencia efectiva de las minorías, elemento indispensable en un gobierno democrático constitucional como el nuestro. *Ibíd.*, pág. 342. Véase 4 Diario de Sesiones, supra, págs. 2594-2597; Trías Monge, *Historia Constitucional de Puerto Rico*, op. cit., págs. 142-146; C. Ramos de Santiago, *El desarrollo constitucional de Puerto Rico: Documentos y casos*, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Medinaceli, 1978, págs. 517-519. Otras disposiciones de nuestra Constitución favorecen esta visión. Art. I, Sec. 1; Art. III, Sec. 4. Véase 4 Diario de Sesiones, supra, págs. 2590-2592; Trías Monge, *Historia Constitucional de Puerto Rico*, op. cit., Tomo III, págs. 269-270, 277-278.

37. En nuestro ordenamiento constitucional la mayoría parlamentaria tiene el deber ineludible de cumplir con el mandato expresado por el pueblo. Las minorías tienen una obligación especial de descargar su responsabilidad fiscalizadora sin obstaculizar el funcionamiento legislativo.

38. En cuanto a las minorías los padres de nuestra Constitución dispusieron:

"... [E]s básico para la salud democrática que las minorías tengan una representación que, aún bajo las circunstancias más desfavorables, les permita cumplir adecuadamente su función de fiscalizar y estimular a la mayoría en su obra de gobierno sin crear entorpecimientos que puedan resultar en detrimento de la democracia. En todo caso, el pueblo debe tener los medios para asegurarse de que sus representantes respondan siempre a la verdadera voluntad de los representados. (Enfasis suplido.) Informe de la Comisión de la Rama Legislativa de la Convención Constituyente, 4 Diario de Sesiones, supra, pág. 2590.

39. Más aún, tan reciente como junio de 2009, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró el reconocimiento del derecho de la mayoría a tomar las decisiones que le correspondan y, de igual forma, el derecho de la minoría a ser escuchada y a dejar constancia de sus puntos de vista. Suárez Cáceres v. C.E.E., 2009 JTS 100, con énfasis nuestro.

40. A tono con el espíritu democrático que inspira la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Reglamento del Senado de Puerto Rico ofrece a todos los miembros del Senado la oportunidad de participar en los trabajos del cuerpo y establece los mecanismos para tal participación. *Silva v. Hernández Agosto*, 118 D.P.R. 45, con énfasis nuestro.

41. La Sección 1.3 del Reglamento del Senado de Puerto Rico dispone como propósito el asegurar a todos los miembros del Cuerpo la oportunidad de participar, activa y concienzudamente, en los procesos analíticos y decisorios del Senado.

42. Asimismo, mediante algunas de sus disposiciones, se asegura el respeto debido a los derechos individuales de todos los senadores - a los de minoría y a los de la mayoría parlamentaria por igual.

43. De acuerdo a la Regla 37, todo proyecto de ley o resolución estará sujeto a enmiendas, las cuales deben ser germanas al asunto bajo consideración. (R. del S. 27 de 12 de enero de 2009, Sección 37.1, con énfasis nuestro).

44. También, el Presidente **reconocerá** a los Senadores y Senadoras que habrán de participar en un debate, concediendo el uso de la palabra en el orden de la solicitud. Cuando dos o más Senadores o Senadoras soliciten la palabra al mismo tiempo, el Presidente decidirá el orden del turno, dando preferencia al miembro que no se hubiere expresado todavía, si éste fuere el caso. (R. del S. 27 de 12 de enero de 2009, Sección 38.2, con énfasis nuestro).

45. Además, según la Regla 38 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, la cuestión de orden se someterá al Presidente del Senado, quien deberá resolverla de inmediato. No obstante, de entenderlo necesario, el Presidente podrá reservar su decisión sobre tal cuestión de orden, pero deberá emitirla dentro del término de dos días laborables de haber sido ésta sometida. (R. del S. 27 de 12 de enero de 2009, Sección 44.2, con énfasis nuestro).

46. Un Senador o Senadora podrá presentar en cualquier momento una cuestión de privilegio personal o del Cuerpo. (R. del S. 27 de 12 de enero de 2009, Sección 45.2, con énfasis nuestro).

47. Ninguna de las disposiciones citadas del Reglamento le concede al Presidente del Senado discreción en cuanto al reconocimiento de los Senadores que interesen debatir, presentar enmiendas o plantear cuestiones de orden o de privilegio.

48. En esta ocasión, en violación a las disposiciones reglamentarias y a la jurisprudencia citada, el Presidente del Senado no permitió que los miembros de la minoría pudieran presentar enmiendas, solicitar el uso de la palabra, plantear cuestiones de orden ni plantear cuestiones de privilegio personal y del Cuerpo.

49. Por tanto, las medidas tramitadas en la sesión senatorial del 24 de agosto de 2009 no fueron aprobadas conforme a derecho toda vez que se coartaron las prerrogativas y funciones constitucionales de los senadores demandantes, se violaron los derechos de la minoría, y se ignoraron las disposiciones relevantes del Reglamento del Senado sobre el procedimiento parlamentario correcto.

C. SOBRE EL SENADO DE PUERTO RICO, DEBERES Y FACULTADES

50. Dispone el Artículo III Sección 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico lo siguiente:

ARTICULO III DEL PODER LEGISLATIVO

§ 1. [Asamblea Legislativa].

El Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras - el Senado y la Cámara de Representantes - cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general.

51. Conforme al Artículo III Sección 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

§ 9. [Facultades de cada cámara].

Cada cámara será el único juez de la capacidad legal de sus miembros, de la validez de las actas y del escrutinio de su elección; elegirá sus funcionarios, adoptará las reglas propias de cuerpos legislativos para sus procedimientos y gobierno interno; y con la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone, podrá decretar la expulsión de cualquiera de ellos por las mismas causas que se señalan para autorizar juicios de residencia en la Sección 21 de este Artículo. Cada cámara elegirá un presidente de entre sus miembros respectivos. (Cita textual del Artículo III, Sección 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con ennegrecido y subrayado nuestro).

52. De acuerdo al Artículo III, Sección 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Senado de Puerto Rico será el único juez en relación a:

- a) La capacidad legal de sus miembros,
- b) La validez de las actas mediante las cuales fueron electos sus miembros,
- c) La validez del escrutinio mediante las cuales fueron electos sus miembros, y,
- d) Tendrá facultad para adoptar las reglas propias de cuerpos legislativos para sus procedimientos y gobierno interno.

53. A pesar de este precepto constitucional, los tribunales tienen amplios poderes para examinar actuaciones alegadamente inconstitucionales del Poder Legislativo, cuando éste ejerce su función como juez de las calificaciones de sus miembros y para

determinar que la actuación legislativa cumple con el debido procedimiento de ley, siendo todas estas cuestiones de naturaleza justiciable". Esteves v. Sri. Cám. de Representantes, 110 D.P.R. 585 (1981).

54. A su vez, "la disposición constitucional, que inviste a las Cámaras con el poder de enjuiciar la elección de sus miembros, está restringida por otras disposiciones legales, entre otras, el derecho a un debido proceso de ley que tiene todo ciudadano bajo la Constitución de Puerto Rico". Santa Aponte v. Secretario del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977).

55. Por otro lado, el Artículo III, Sección 14 de la Constitución del Estado Libre Asociado, dispone que: "Ningún miembro de la Asamblea Legislativa será arrestado mientras esté en sesión la Cámara de la cual forme parte, ni durante los quince días anteriores o siguientes a cualquier sesión, excepto por traición, delito grave, o alteración de la paz; y todo miembro de la Asamblea Legislativa gozará de inmunidad parlamentaria por sus votos y expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus comisiones.

56. Nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado que dicha cláusula confiere inmunidad a los miembros de la Asamblea Legislativa contra responsabilidad civil o criminal respecto a actuaciones y acciones relacionadas con los procesos legislativos legítimos.

57. Son actividades legislativas legítimas, además de la de formular las leyes, la de investigar y fiscalizar al Gobierno, la de debatir asuntos de interés público y la de mantener informado al pueblo sobre la marcha de la cosa pública. Estas funciones, por definición, están protegidas por la doctrina de la inmunidad parlamentaria. Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368 (1984).

58. Sin embargo, la inmunidad parlamentaria no es absoluta y corresponde a los tribunales, y no al Poder Legislativo, definir sus contornos. Vélez Ramírez v. Colberg Ramírez, 117 D.P.R. 873 (1986).

59. Además, la autorización por la Asamblea Legislativa de una orden constitucional no inmuniza a aquellos que la ponen en vigor. Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986).

60. "Como intérprete máximo de la Constitución del Estado Libre Asociado, le corresponde al Tribunal Supremo determinar los contornos de sus cláusulas. Tal principio no prejuzga la amplitud o estrechez de determinada facultad legislativa o ejecutiva y el grado de escrutinio judicial a que debe sujetársele. Hay que tomar en cuenta las razones históricas y sociales que motivaron su reconocimiento y el papel que para su medición les asigna a los tribunales la doctrina de separación de poderes". Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368 (1984).

61. "En nuestro ordenamiento de ley, ningún poder es absoluto." Santa Aponte v. Secretario del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977).

62. Por tal razón, considerando las violaciones constitucionales y reglamentarias envueltas, los senadores demandantes solicitan que el Honorable Tribunal ejerza en el presente caso su facultad revisora.

D. JUSTICIABILIDAD

63. "La norma de justiciabilidad exige la existencia de un caso o controversia real para ejercer válidamente el poder judicial. Los tribunales existen únicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen interés real en obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas". Jorge Suárez Cáceres v. Comisión Estatal de Elecciones y Otros, 2009 J.T.S. 100.

64. "Por exigencia del requisito de justiciabilidad, la controversia planteada ante los tribunales debe ser definida, concreta, que afecte las relaciones jurídicas de partes que tienen un interés jurídico antagónico; la controversia debe ser real y sustancial, y que permita un remedio específico mediante una sentencia de carácter concluyente". Id.

65. "En virtud de la doctrina de justiciabilidad, los tribunales se cuestionan y evalúan si es apropiado o no que atiendan determinado caso, ello tomando en consideración diversos factores y circunstancias mediante un análisis que les permite ejercer su discreción en cuanto al límite de su poder constitucional. Esos elementos son corolarios de la norma de justiciabilidad". Id.

66. Cuando se alega una actuación inconstitucional de una cámara legislativa, lo primero que tenemos que examinar es la doctrina de "cuestión política".

67. En el presente caso se alegan unas actuaciones inconstitucionales que impiden que los demandantes ejerzan sus facultades legislativas y que privan, a los electores que votaron por ellos, de una representación efectiva en los trabajos y deliberaciones del cuerpo.

68. Para que se excluya una causa de acción por "cuestión política" es indispensable que exista uno de los siguientes elementos:

a) una delegación expresa del asunto en controversia a otra rama del gobierno;

b) la ausencia de criterios o normas judiciales apropiadas para resolver la controversia;

c) la imposibilidad de decidir sin hacer una determinación inicial de política pública que no le corresponde a los tribunales;

- d) la imposibilidad de tomar una decisión sin expresar una falta de respeto hacia otra rama de gobierno;
 - e) una necesidad poco usual de adherirse, sin cuestionar, a una decisión política tomada previamente, y
 - f) potencial de confusión proveniente de pronunciamientos múltiples de varios departamentos del Gobierno sobre un punto. Silva v. Hernández Agosto, 86 J.T.S. 94. Véanse: Powell v. McCormack, 395 U.S. 486 (1969); Gilligan v. Morgan, 413 U.S. 1 (1973); United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974); Goldwater v. Carter, 444 U.S. 996 (1979); Crockett v. Reagan, 720 F.2d 1355 (1983).
69. En Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977), al interpretar el poder de exclusión de la Sec. 9 del Art. III de la Constitución se concluyó que "los cuerpos legislativos no pueden convertirse en los jueces constitucionales de sus propios poderes. Es a los tribunales a quienes les toca interpretar las leyes y la Constitución".
70. "El mero hecho que el pleito busca la protección de un derecho político no quiere decir que el mismo presenta una cuestión política."
71. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ante reclamos de cuestión política, ha reafirmado el poder de los tribunales de ser los intérpretes finales de los contornos de la Constitución y para determinar si los actos de una rama de gobierno exceden su autoridad constitucional. Marbury v. Madison, 1 Cranch 137 (1803); Santa Aponte v. Srio. del Senado, supra.
72. La interpretación inicial que de la Constitución haga otra rama merece deferencia, pero debe prevalecer la norma de que la determinación final corresponde a los tribunales. United States v. Nixon, supra.
73. Nuestra estructura de gobierno no permite que las ramas políticas del Gobierno se conviertan en árbitros de sus propios

actos. Véanse: The Supreme Court, 1968 Term., 83 Harv. L. Rev. 62, 68 (1969); H. Wechsler, Toward Neutral Principles of Constitutional Law, 73 Harv. L. Rev. 1 (1959); Henkins, op. cit.; Redish, op. cit.; Tribe, op. cit.; Nowak, Rotunda y Young, op. cit.; A. Bickel, The Least Dangerous Branch, 2da ed., Connecticut, Yale U. Press, 1986, págs. 183--198.

74. Si la parte demandada alegara que la controversia no es justiciable porque estamos ante una materia expresamente delegada a la Asamblea Legislativa: la facultad de adoptar reglas internas, ya eso fue resuelto en la negativa mediante el caso de Silva v. Hernández Agosto, 86 J.T.S 94.

75. Es doctrina firmemente establecida que al ejercer su función de reglamentar, la Asamblea Legislativa y las comisiones no pueden obviar e ignorar las limitaciones constitucionales. El Tribunal Supremo federal en United States v. Ballin, 144 U.S. 1, 5 (1892), examinó la validez de una regla del Congreso y concluyó:

"La Constitución faculta a cada cámara a determinar sus reglas de procedimiento. No pueden mediante sus reglas ignorar limitaciones constitucionales o violar derechos fundamentales...." (Traducción nuestra.) (Ennegrecido y subrayado suplido).

76. Si la parte demandada alegara que al presente no existen criterios o normas judiciales para resolver la controversia, tampoco le asistiría la razón. Silva v. Hernández Agosto, 86 J.T.S 94.

77. El planteamiento central en el presente caso es que al legislar obviando la ley y al no permitirles debatir y expresarse sobre las medidas a aprobarse, se violan sus derechos constitucionales y a través de esto se afecta la eficacia del voto de sus representados.

78. El Art. III de nuestra Constitución, así como el Art. II, Sec. 2 y el Preámbulo están predicados en la existencia de un gobierno democrático y representativo.

79. Es función ineludible de los tribunales interpretar la Constitución y velar que el espíritu y el esquema democrático de esta Carta no se vulnere. Fuster v. Busó, 102 D.P.R. 327 (1974); García Passalacqua v. Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 49 (1976); Santa Aponte v. Srio. del Senado, supra; Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 731-734 (1982).

80. Si la parte demandada alegara que la controversia constituye una cuestión política porque cualquier intervención sería una falta de respeto y deferencia a la Asamblea Legislativa, también dicho punto fue examinado y descartado en el caso Silva v. Hernández Agosto, 86 J.T.S 94.

81. "La teoría de la separación de poderes requiere que las facultades delegadas por el pueblo en la Carta Constitutiva se distribuyan entre las tres ramas. Su premisa es evitar la concentración de poderes en una sola. La relación entre los poderes del Gobierno debe ser dinámica y armoniosa. Su éxito depende de que cada una acepte y respete la autoridad de las otras y entienda la interrelación de sus funciones. Su perdurabilidad requiere que cuando haya conflicto sobre el alcance de los poderes constitucionales de cualquiera de ellas, los tribunales intervengan con prudencia y deferencia para aclarar los contornos de la Constitución y facilitar la resolución de las diferencias. Silva v. Hernández Agosto, 86 J.T.S 94.

82. En este contexto, determinar las normas constitucionales mínimas que deben regir el funcionamiento de los debates en el Hemiciclo del Senado de Puerto Rico no constituye una indebida intromisión en los trabajos de la Rama Legislativa. Los Senadores demandantes han acudido a los tribunales para que

resolvamos este problema. La determinación final de esta controversia es un asunto para el cual los tribunales están preparados y tienen la experiencia y autoridad constitucional para tomar una decisión que responda a las circunstancias históricas de nuestro país.

83. Nuestra Constitución incorporó, en la Sec. 7 del Art. III, un innovador mecanismo para garantizar la representación efectiva de las minorías en la Asamblea Legislativa. Véase Fuster v. Busó, supra. Este mecanismo "garantiza la existencia efectiva de las minorías, elemento indispensable en un gobierno democrático constitucional como el nuestro". (Véase 4 Diario de Sesiones, supra, págs. 2594--2597; Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, op. cit., págs. 142--146; C. Ramos de Santiago, El desarrollo constitucional de Puerto Rico: Documentos y casos, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Medinaceli, 1978, págs. 517-519. Otras disposiciones de nuestra Constitución favorecen esta visión. Art. I, Sec. 1; Art. III, Sec. 4. Véase 4 Diario de Sesiones, supra, págs. 2590--2592; Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, op. cit., Tomo III, págs. 269-270, 277-278.

84. El principio de "un hombre, un voto" consagrado por nuestra Constitución no se limita solamente al proceso eleccionario. De nada sirve que a los ciudadanos se les garantice su derecho al voto si luego aquellos que fueron depositarios de la confianza de los electores son excluidos en momentos cruciales del proceso legislativo.

85. Nuestro esquema constitucional, en su protección a las minorías se extiende más allá del proceso eleccionario. Abarca también la composición de la Asamblea Legislativa para facilitar que represente a todos los sectores de la sociedad. Precisamente para fortalecer el carácter representativo se concibió un

mecanismo para asegurar la participación política a las minorías en la Asamblea Legislativa.

86. Es básico para la salud democrática que las minorías tengan una representación que, aun bajo las circunstancias más desfavorables, les permita cumplir adecuadamente su función de fiscalizar y estimular a la mayoría en su obra de gobierno sin crear entorpecimientos que puedan resultar en detrimento de la democracia. En todo caso, el pueblo debe tener los medios para asegurarse de que sus representantes respondan siempre a la verdadera voluntad de los representados. Informe de la Comisión de la Rama Legislativa de la Convención Constituyente, 4 Diario de Sesiones, supra, pág. 2590.

87. Las minorías tienen una obligación especial de descargar su responsabilidad fiscalizadora sin obstaculizar el funcionamiento legislativo. Las Cámaras tienen los poderes e instrumentos necesarios para asegurar que tanto la mayoría como la minoría cumplan con sus obligaciones hacia el cuerpo y el país sin que se viole el equilibrio y el carácter representativo de la Rama Legislativa.

88. Hay que reconocer el derecho de la mayoría a tomar las decisiones que le correspondan y garantizar el de las minorías a ser escuchadas y a dejar constancia de sus puntos de vista.

Jorge Suárez Cáceres v. Comisión Estatal de Elecciones y Otros, 2009 J.T.S. 100.

89. A tono con el espíritu democrático que inspira la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los procesos parlamentarios tienen que ofrecer, a todos los miembros del Senado, la oportunidad de participar en los trabajos del cuerpo y tiene que establecer los mecanismos para tal participación.

90. No se puede debilitar el balance ideológico que asegura una participación efectiva de las minorías en el proceso legislativo.

91. ¿Cómo puede un Senador o una delegación minoritaria emitir un voto inteligente cuando se le impide debatir y participar en la aprobación de medidas?

92. Si a las minorías se les impide debatir en el hemiciclo las medidas no podrán cumplir cabalmente con su función parlamentaria. Cuando esto ocurre, este sector importante del espectro político del país no estará adecuadamente representado en ese proceso.

93. ¿Para qué se tiene en el Senado de Puerto Rico un Reglamento que su Presidente violenta continuamente, so pretexto de que su partido ostenta la mayoría de los escaños en el Cuerpo?

E. SOBRE EL RECURSO DE INJUNCTION

62. En Puerto Rico el auto de injunction es gobernado por la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 57, y por los Artículos 675-689 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. §§ 3521-3566. Este recurso extraordinario, adoptado del sistema de equidad inglés, va dirigido a prohibir o a ordenar la ejecución de determinado acto, a los fines de evitar causar perjuicios inminentes o daños irreparables a alguna persona, en casos en que no hay otro remedio adecuado en ley. Véase, WRIGHT, MILLER & KANE, FEDERAL PRACTICE AND PROCEDURE: CIVIL 2d , § 2942, Vol. 11A (2da ed. 1995 y Sup. 1997). La Regla 57 establece tres modalidades de injunction. Estas son, el injunction permanente, el injunction preliminar (R. 57.1) y el entredicho provisional (R. 57.2). E.L.A. v. Asociación de Auditores, 147 D.P.R. 669 (1999).

63. La parte promovente de un injunction preliminar deberá mostrar que, de no concederse éste antes de adjudicarse el caso en sus méritos, sufriría daño irreparable. WRIGHT, MILLER & KANE, FEDERAL PRACTICE AND PROCEDURE: CIVIL 2D § 2948.1. En Loiza Sugar Company v. Hernáiz y Albandoz, 32 D.P.R. 903 (1924), se expuso que: Según se usa generalmente, "irreparable" significa aquello que no puede repararse, restablecerse o recompensarse de modo adecuado con dinero, o cuando la compensación no puede estimarse con seguridad. El propósito fundamental del injunction preliminar es mantener el status quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos, para que así no se produzca una situación que convierta en académica la sentencia que finalmente se dicte, o se le ocasionen daños de mayor envergadura al peticionario mientras perdura el litigio. E.L.A. v. Asociación de Auditores, supra.

94. De no concederse el injunction preliminar solicitado, las medidas tramitadas de manera ilegal en la sesión celebrada el 24 de agosto de 2009 podrían quedar aprobadas por la Cámara de Representantes y firmadas y convertidas en Ley por el Gobernador de Puerto Rico, causándole así un daño irreparable a los Demandantes.

95. El Injunction es el remedio más eficaz que puede utilizarse para vindicar los diversos derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución. Gracia Ortiz v. Policía de Puerto Rico, 140 D.P.R. 247 (1996); Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650, 681 (1983).

96. Los motivos o casos que pueden dar paso a la concesión de un injunction se desprenden del Artículo 677 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. 3523) y de la doctrina jurisprudencial vigente. Véase, entre otros, Municipio de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776 (1994); PR Telephone Company v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200 (1975).

97. El injunction es un remedio extraordinario que sólo puede "utilizarse cuando el procedimiento ordinario no provea un remedio rápido, adecuado, y eficaz, para corrección de un agravio de patente intensidad al derecho del individuo que reclame urgente reparación." Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552, 556 (1997).

F. SOBRE LA SENTENCIA DECLARATORIA

98. En la súplica de esta Demanda le incluimos a este Honorable Tribunal una solicitud de Sentencia Declaratoria al amparo de la Regla 59.1 de las de Procedimiento Civil. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 59.1.

99. Esta regla dispone que el Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas aunque se inste o pueda instarse otro remedio. Véase, entre otros, Suárez, et al. v. Comisión Estatal de Elecciones, et. al., Op. del 20 de noviembre de 2004; 2004 T.S.P.R. 179.

100. Por otra parte la misma regla dispone, en el acápite correspondiente:

"Toda persona interesada en una escritura, testamento, contrato escrito, u otros documentos constitutivos de contrato, o cuyos derechos, estado u otras relaciones jurídicas fuesen afectados por un estatuto, ordenanza municipal, contrato o franquicia, podrá solicitar una decisión sobre cualquier divergencia en la interpretación o validez de dichos estatutos, ordenanzas, contrato o franquicia y además que se dicte una declaración de los derechos, estados u otras relaciones jurídicas que de aquellos se deriven. Un contrato podrá ser interpretado antes o después de haber sido infringido. Regla 59.2 (a) de las de Procedimiento Civil; 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 59.2 (a).

101. Por tanto, "la sentencia declaratoria es aquella que se dicta en un proceso en el cual los hechos alegados demuestran que existe una controversia sustancial entre partes que tienen intereses legales adversos, sin que medie lesión previa de los

mismos con el propósito de disipar la incertidumbre jurídica y contribuir a la paz social". R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, Ed. Michie de Puerto Rico, 1997, a la pág. 448.

102. El objetivo de la Regla 59 de Procedimiento Civil, *supra*, la cual regula lo relativo a las sentencias declaratorias, es proveer al ciudadano un mecanismo procesal de carácter remedial mediante el cual **se dilucide** ante los tribunales los méritos de cualquier reclamación que en forma latente entrañe un peligro potencial en su contra. Charana v. Pueblo, 109 D.P.R. 641, 653 (1980).

103. Asimismo, en variadas ocasiones, incluyendo en el caso de Suárez, *supra*, el Tribunal Supremo ha expresado que el mecanismo de Sentencia Declaratoria es adecuado para adjudicar controversias de índole **constitucional**, Asociación de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991) y, conforme a la doctrina prevaleciente, debe utilizarse cuando permite finalizar situaciones de incertidumbre o inseguridad en cuanto a derechos.

V. RECAPITULACIÓN

104. Las **actuaciones** y gestiones realizadas por la parte demandada, son **contrarias al ordenamiento legal vigente** y al **Reglamento del Senado**, violan la cláusula constitucional del Debido Proceso de Ley y atentan contra los derechos y prerrogativas de los co-demandantes de epígrafe.

EN VIRTUD DE LO ANTES EXPUESTO, se suplica de este Honorable Tribunal, lo siguiente:

- i. Declare HA LUGAR la presente Demanda y cada una de sus causas de acción.
- ii. Emita injunction preliminar ordenando a los Demandados a que, sin dilación alguna, detengan el trámite de las medidas legislativas consideradas en la sesión del 24 de agosto de 2009.

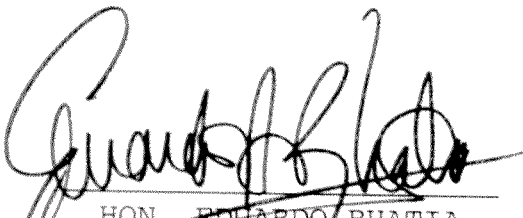
- iii. Emita Sentencia Declaratoria, decretando que el co-demandado Rivera Schatz y/o el Presidente en funciones o accidental que actúe como tal tendrá que permitir el debate legislativo de las medidas ante su consideración por parte de la minoría, y,
- ii. que las actuaciones antes mencionadas en la sesión senatorial del 24 de agosto de 2009 fueron ultra vires e ilegales y, por ende, sin valor legal alguno; nulas ab initio, y,
- iii. resolviendo que las medidas legislativas tramitadas en la sesión del 24 de agosto de 2009 no fueron aprobadas conforme a derecho ante la ausencia de las certificaciones requeridas por la Ley Núm. 103, las violaciones al procedimiento parlamentario establecido en el Reglamento del Senado, las violaciones a las prerrogativas y funciones constitucionales de los senadores demandantes, y las violaciones a los derechos constitucionales de la minoría legislativa.
- iv. Emita Sentencia Declaratoria decretando los contornos constitucionales a garantizarse en la consideración de medidas futuras.
- v. Ordene a los co-demandados que cesen y desistan de aprobar medidas sin la correspondiente certificación, bajo juramento, del impacto fiscal, como lo ordena la Ley 103 de 2006.
- vi. Ordene a los co-demandados que cesen y desistan de aprobar medidas impidiendo el debate y la libre expresión por parte de los demandantes (minoría) y garantizando su derecho a ser escuchados y a dejar constancia de sus puntos de vista.
- vii. Ordene a los co-demandados a cumplir con las disposiciones del Reglamento del Senado.
- viii. Se cese y desista de la práctica de impedir que los demandantes ejerzan sus facultades legislativas y, por ende, práctica que priva, a los electores que votaron por ellos, de


una representación efectiva en los trabajos y deliberaciones del cuerpo.

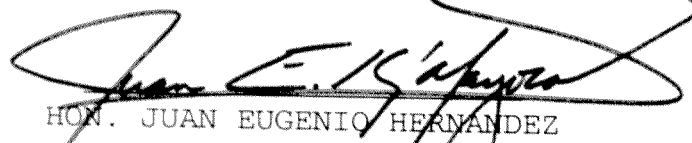
ix. Emita cualquier otra providencia que corresponda en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA:


Desde San Juan, Puerto Rico a 27 de agosto de 2009.



HON. EDUARDO BHATIA
GAUTIER,
SENADOR POR ACUMULACIÓN

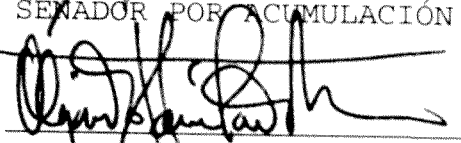

HON. SILA MARI GONZALEZ
CALDERÓN,
SENADORA POR ACUMULACIÓN



HON. JUAN EUGENIO HERNANDEZ
MAYORAL,
SENADOR POR ACUMULACIÓN


HON. EDER E. ORTIZ ORTIZ,
SENADOR POR ACUMULACIÓN


HON. JOSÉ LUIS DALMAU
SANTIAGO,
SENADOR POR ACUMULACIÓN


HON. JORGE I. SUAREZ
CACERES,
SENADOR POR ACUMULACIÓN


HON. ALEJANDRO GARCÍA
RADILLA,
SENADOR POR ACUMULACIÓN


HON. CIRILO TIRADO RIVERA,
SENADOR POR ACUMULACIÓN